

LA VENEZUELA DE CHÁVEZ

(III)

**Carlos Fedele*



¿Qué cambió para las elecciones de octubre?

El diagnóstico de la enfermedad de Hugo Chávez en el 2011 supuso para muchos el auspicioso presagio de que el régimen bolivariano podría estar, finalmente, encaminándose hacia su fin.

La pregunta sobre si podía sustentarse un chavismo sin Chávez, de una u otra manera era contestada negativamente desde todas las partes. Sus propios seguidores respondían negativamente a esa posibilidad, probablemente por temor a que manejar tal hipótesis fuera interpretada por el Comandante como una muestra de deslealtad (a más de uno seguramente se le ocurrió que la enfermedad en realidad era una maniobra para observar qué movimientos se hacían ante la eventual ausencia). También es verdad que faltando poco para las elecciones, reconocer que Chávez no estaría para la contienda podría haber implicado una debilidad muy difícil de sortear en la competencia electoral. Lo cierto es que ninguno de los personajes del chavismo, sin ser el propio Chávez, alcanza la popularidad de algunas figuras de la oposición. La competencia virtual entre los distintos personeros del régimen se transformaría en enfrentamiento y haría eclosionar mil y un problemas. En algún caso muy pesado, como lo serían las luchas facciosas entre quienes detentan espacios de poder de neto corte mafioso. Todo lo cual no es otra cosa que las consecuencias que suelen esperarse de un liderazgo providencial —cuasi mesiánico— que colocándose por encima de las instituciones distribuye prebendas con sus decisiones, o con la ausencia de ellas, tomadas según su arbitrio.

No obstante, las esperanzas que la enfermedad del presidente Chávez generó en la oposición venezolana (y en gran parte del mundo) revelaron la complejidad de la situación,

ya que el cáncer pareció devenir en la solución “celestial” para terminar con lo que de otra forma no habría caso. Con la, por lo menos por el momento, extraordinaria recuperación de Chávez, las fortalezas y debilidades del régimen y las oportunidades y desafíos que éstas generan, retornaron al punto inmediato anterior al anuncio de la enfermedad. O ni siquiera eso si es que entran a influir a favor de Chávez los efectos de la “piedad” y de lo “milagroso” que estas situaciones suelen provocar en muchas personas.

Los problemas del régimen chavista no son pocos. Las protestas callejeras por diversos asuntos son cotidianas (durante el 2011 un promedio de ocho por día). Como dificultades acuciantes figuran la escasez de alimentos, la inflación que ronda el 27% —la más alta de Latinoamérica— y para lo cual lanzaron a un masivo control de precios, aumentos salariales insuficientes (decretados sin negociación alguna), cortes de energía eléctrica, el colapso del sistema de salud reconocido por las propias autoridades y la inseguridad, considerado como el problema más grave del país por amplísimas mayorías sin distinción de estrato social (en el 2011 los homicidios alcanzaron la escalofriante cifra de 53 por día, casi 20.000 en el año). Algunos de los problemas, además, poseen sus propias perplejidades porque no otra cosa puede provocar que un país petrolero como pocos tenga que importar electricidad de Colombia e igual viva con cortes diarios; que un país con altos niveles de consumo tenga que importar el 70% de lo que necesita para comer o vestirse y que a pesar de ello haya desabastecimiento; que un país que dedica importantísimos recursos a políticas sociales no sea capaz de construir ni una décima parte de las viviendas con las que se comprometió.

La economía no creció y la deuda externa se duplicó. La dependencia de los ingresos petroleros se torno traumática: de cada 100 dólares que ingresan por exportaciones, 95 provienen del petróleo. El sector no petrolero aporta sólo el 5% de los ingresos cuando en 1998 aportaba el 31%. Al mismo tiempo, Venezuela se volvió más dependiente de un solo destino, los Estados Unidos (el archienemigo imperialista), a cuyo mercado le vende el 65% del total de las exportaciones de petróleo. Además, el clima de hostilidad sobre la empresa privada (“*me declaro en guerra económica*” afirmaba Chávez por el 2010) ha provocado que en estos momentos existan 40% menos de unidades empresariales de las que había en 1998. Venezuela es un ejemplo indudable de desperdicio de una riqueza genuina generadora de importantes recursos que no se reinvierten como corresponde en la estructura económica. “*Sembrar el petróleo*” pedía infructuosamente Arturo Usler Pietri.

La pobreza se ha reducido de un 45% a un 28%, por lo que sigue siendo alta pese a la importante reducción. Sin embargo, medida por el índice de desarrollo humano la situación no sólo ha permanecido estancada sino que ha desmejorado considerada en forma relativa (posición 48 entre 174 países en 1997; posición 73 entre 177 en 2011).

Estos y otros problemas que tiene la República Bolivariana, algunos de los cuales no son de ahora, conducen a cuestionarse sobre qué es lo que le permite a Chávez mantener su popularidad y que una vez más tenga muy altas probabilidades de renovar el mandato como presidente de Venezuela.

Cuando Hugo Chávez asume como presidente por primera vez (1999), lo hace sobre el profundo deterioro de un sistema de partidos que había gobernado al país caribeño durante cuarenta años, dejando como saldo a un país corrompido y una sociedad empobrecida, pese a haber gozado de importantes períodos de bonanza económica. Venezuela, en cierto sentido, vive desde hace un tiempo una situación similar a aquella en cuanto a que los problemas del país, en lo social y económico, son graves a pesar de los cuantiosos ingresos petroleros nunca antes recibidos (no por la capacidad de producción sino por los precios del barril, aproximadamente un 1300% por encima que en 1999) y sin embargo, en principio, el respaldo a Chávez (más que a su régimen) tiende a ser mayoritario. Y aunque finalmente no lo fuera, la cuestión es que a muchos otros gobernantes con esta misma situación sus propios pueblos ya los hubieran arrastrado por el fango.

Por lo tanto seguramente la clave se encuentre en cómo se entienden e interpretan los

hechos. En el pasado, los venezolanos no tuvieron duda en entender el declive socioeconómico como el resultado de gobernantes y dirigentes partidarios que se dormían sobre la riqueza petrolera para beneficiar a un pequeño círculo de privilegiados. En cambio, durante el chavismo, las lecturas no son lineales. Las llamadas Misiones han significado mejoras concretas en la situación de importantes segmentos de la sociedad a través de políticas públicas de amplia cobertura y coordinación entre diferentes áreas del Estado. Y las distintas iniciativas de economía social, comunal o mixta, apoyadas desde el Gobierno, aunque todavía con relativo peso, han implicado otra herramienta de inclusión social para sectores carenciados. En la actualidad, entonces, vastos sectores de la sociedad venezolana, especialmente los populares, entienden que pese a los problemas económicos y aún pese a los rasgos autoritarios, lo que existe es un régimen preocupado y ocupado por los más necesitados y que pueden esperar de él la solución a sus afligidas vidas. No tomar debida cuenta de este hecho es no entender a cabalidad lo que sucede en Venezuela. Como contracara, la expansión de las expectativas que generan las políticas sociales y el discurso que las promueve con sus promesas de equidad y justicia social, actúan como potenciales factores de insatisfacción ya que el incumplimiento de las metas es recurrente. Asimismo, la concepción de un “Estado mágico” y de un líder que todo lo pueden y todo lo ofrecen, es una garantía de expansión de las demandas que el propio modelo no está en condiciones de sustentar. Es muy difícil prever qué tendrá mayor incidencia en el corto plazo: si la insatisfacción por lo que no se alcanza o el temor por perder lo que si se alcanzó.

Por otra parte, independientemente de las valoraciones sobre los alcances y los límites de las políticas sociales o de las medidas relacionadas con el modelo económico, es evidente que en ambos casos se teje una red de relaciones de dependencia entre los beneficiarios y el régimen. Las Misiones contemplan en una buena proporción planes netamente asistencialistas, incluyendo la entrega directa de artículos de primera necesidad a familias que terminan supeditando su sobrevivencia a la dádiva de los funcionarios chavistas. Cinco años atrás, un 50% de la toda la población de Venezuela ya se había beneficiado de por lo menos una de las Misiones. Las nuevas formulas de propiedad empresarial, como cooperativas, empresas de producción social y empresas cogestionadas —el llamado núcleo endógeno micro— son promovidas y financiadas desde el Estado y sobreviven gracias a los contratos con empresas públicas y otros entes de la Administración (además de no pagar impuestos porque para eso esta la renta petrolera, al decir de un diputado chavista). Por último, la expansión del Estado a áreas antes en manos del capital privado supone la existencia actual de 2.500.000 de funcionarios estatales. Este es un contexto de por sí fuertemente condicionante para la competencia electoral en cualquier situación, pero que para el caso, se le añade el manejo partidista para nada sutil de las políticas públicas por parte del gobierno.

La otra pata del contexto, que en sus extremos es imposible de desligar de lo antedicho, es la del propio régimen. Como señalamos en la anterior entrega, sus características alcanzan un grado tal que se hace necesario encontrarle una nueva tipificación. Porque analizarlo desde el debate sobre la calidad de la democracia puede ser ridículo por lo obvio. Con el título del último informe de Human Rights Watch —“Concentración y abuso de Poder en la Venezuela de Chávez”— alcanzaría para dibujar la situación, pero igual transcribiremos un párrafo: *“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente o interfieren en su agenda política. En los últimos cuatro años, el Presidente Chávez y sus partidarios han usado estas facultades en una variedad de casos, con consecuencias negativas para la independencia judicial, la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos”*. En febrero de este año fueron aprobadas algunas modificaciones a la legislación contra la delincuencia organizada y financiación del terrorismo, que entre sus propósitos declarados está la loable intención de combatir el tráfico de personas, órganos y armas. Pero que de paso se dejó deliberadamente ambiguo y a discrecionalidad del gobierno la posibilidad de tipificar como delictivas por desestabilizadoras cualquier opinión o crítica que cuestione a las autoridades públicas. Como se señalo, algo muy peligroso para un Chávez que no tiene ningún problema en

acusar de “traidor a la patria” y “terrorista” tanto a un opositor que crítica como a un comerciante que subió un precio por encima de lo fijado. En síntesis, la coexistencia de leyes de formato democrático y métodos autocráticos es una fuente permanente de inestabilidad que a la oposición le es muy difícil de sobrellevar. Máxime si el debate se polariza y personaliza como Chávez hace deliberadamente, lo que esta campaña electoral está evidenciando nuevamente.

En el panorama que describimos se mueve la oposición a Chávez, una coalición de 20 partidos de amplio espectro (Mesa de la Unidad Democrática). Tiene tres ventajas respecto al pasado. En primer lugar, se ha unificado y tiene un candidato común surgido de unas inéditas primarias en las que participaron tres millones de venezolanos. El candidato, además, representa un estilo de centro en contraste con algunos de sus competidores en las internas, más proclives a poder ser tildados de reaccionarios por el chavismo (altamente conveniente para el mismo). En segundo lugar, la oposición es claramente liderada por dirigentes partidarios a diferencia del protagonismo asumido antes por dirigentes empresariales, sindicales o por los propios medios de comunicación. Por último, la oposición se desprendió de los actores antidemocráticos de los episodios de 2002 y 2003.

Las fuerzas antichavistas tuvieron resultados que podrían considerarse alentadores. En las presidenciales de 2006, Chávez alcanzó el 62% de los electores. En las cuatro instancias electorales subsiguientes, si bien en ninguna se elegía presidente —donde la opción de votar o no por Chávez se personaliza al máximo— el chavismo nunca repitió la votación: por escaso margen la reforma constitucional de 2007 fue derrotada (50,2% por el No), en las regionales de 2008 y en otra enmienda constitucional de 2009, obtuvo el 54% y en las parlamentarias de 2010 no alcanzó el 50%, colocándose apenas nueve décimas sobre la Mesa de Unidad, pero por debajo de la totalidad de la oposición (que incluye a “Patria Querida”, opositor a Chávez, pero por fuera de la Mesa). En octubre se vuelve a estar frente a una elección presidencial con lo que las dificultades se multiplican. El primer desafío de la oposición es vencer el miedo de los electores a participar por la posibilidad de ser identificados como votantes antichávez y de esta manera ser perjudicados con los beneficios y prebendas que por algunos de los tantos sistemas distribuye el régimen.

La campaña ya comenzó hace algunas semanas. Las novedades que cabría esperar no son tantas y, en rigor, en lo esencial el escenario es el construido a partir del cúmulo de medidas adoptadas por Chávez con el transcurso del tiempo. Todo lo que se traduce en un camino arduo y peligroso para todo aquel que no comulgue con las ideas del líder bolivariano.

Sin embargo, *“eppur si muove”*.

**Politólogo.
Universidad de la República*